

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 1° Juzgado de Letras de Rengo  
CAUSA ROL : C - 1603 - 2016  
CARATULADO : EMPRESAS CAROZZI S.A./ GUSTAVO HECHEM  
JOTTAR E.I.R.L.

---

En Rengo, a veintisiete febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

1° Que con fecha 11 de octubre de 2016, comparece don Sergio Yávar Celedón, abogado, en representación de **EMPRESAS CAROZZI S.A.**, persona jurídica del giro alimenticio, ambos domiciliados para estos efectos en calle España 679, segundo piso, comuna de San Fernando, quien interpone demanda ejecutiva contra **Gustavo Hechem Jottar E.I.R.L.**, del giro agrícola, representada por don Gustavo Felipe Hechem Jottar, agricultor, ambos domiciliados en Arboleda 2 y 3, comuna de Requínoa.

Funda su acción señalando que su representada demandó en juicio arbitral a la ejecutada en el año 2012. Indica que el 6 de agosto de 2013 se dictó sentencia que condenó a la ejecutada a pagar la suma USD 242.825, en su equivalente en pesos, de acuerdo al valor del dólar observado vigente a la fecha del pago efectivo sin reajustes ni intereses. Luego refiere que, el 28 de octubre de 2013 se certificó que esa sentencia quedó firme o ejecutoriada.

Continúa señalando que la obligación es líquida, actualmente exigible y la acción ejecutiva no ha prescrito, por lo que procede la ejecución.

Finaliza, previas citas legales, tener por interpuesta demanda ejecutiva de obligación de dar en contra de Gustavo Hechem Jottar E.I.R.L., representada por don Gustavo Felipe Hechem Jottar, ambos ya individualizados, y despachar mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la cantidad de USD 242.825 (doscientos cuarenta y dos mil ochocientos veinticinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), en su equivalente en pesos, de acuerdo al valor del dólar observado vigente a la fecha del pago efectivo, sin reajustes ni intereses, y ordenar que se siga



adelante con la ejecución hasta obtener el pago íntegro de lo demandado, con costas.

2° Que con fecha 26 de octubre de 2016, se notificó la demanda en forma legal.

3° Que con fecha 4 de noviembre de 2016, comparece don Gustavo Felipe Hechem Jottar en representación de la parte ejecutada, deduciendo las siguientes excepciones:

a) La excepción de falta de personería de quien comparece a nombre del ejecutante. Fundado en que comparece por la sociedad anónima demandante don Sergio Yávar Celedón, quien invoca como personería la copia de la escritura pública otorgada con fecha 23 de septiembre de 2014, más de dos años antes de deducir la demanda de autos, que porta un timbre de un notario público, no identificado, que da fe que con fecha 06 de octubre de 2016, tuvo a la vista una copia anterior. Refiere que nada aporta tal timbre sobre la vigencia del mandato.

Manifiesta que la copia acompañada en autos carece de un requisito esencial, cual es acreditar su vigencia, motivo por el cual concluye que, el señor Yávar no ha probado la personería que dice conducir, del modo legalmente exigible en juicio, y lo obrado por él en esta causa carece de valor.

Solicita que se tenga por no constituido en derecho el mandato judicial invocado, procediendo acoger esta excepción y, con su mérito, negar lugar a la ejecución, por falta de personería de quien dice comparecer por el ejecutante, sin más trámite y sin necesidad de entrar al fondo.

Finaliza expresando que como consecuencia de este vicio, debe tenerse por no notificada válidamente la demanda, y por nulo todo lo obrado en autos con posterioridad a ella.

b) La excepción de faltarle al título los requisitos exigidos por las leyes para que tenga fuerza ejecutiva.

Basa su excepción indicando que se pretende sustentar esta demanda ejecutiva en un fallo arbitral, dictado con fecha 6 de agosto de 2013, por el árbitro don Guillermo Weinstein Iglesias, notificado al apoderado de su parte con fecha 20 de agosto de 2013, por el receptor judicial don



Jaime Acuña Herrera. Refiere que el señor Weinstein, conforme lo pactado en la cláusula décimosegunda del contrato, debió actuar en calidad de árbitro arbitrador. Reconoce que aparece suscrito por el árbitro y, actuando como actuario, por don Andrés del Valle Valenzuela, quien afirma no es un ministro de fe, por no decirlo su pie de firma, y porque se trata de un distinguido abogado.

Refiere que la situación expuesta vulnera lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

Añade que no se acompañó antecedente alguno que respalde el origen y la validez del fallo.

Concluye que estamos en presencia de un documento emanado de simples particulares, sin firma alguna de ministro de fe, ni de dos testigos, lo que le resta toda validez y, por ende, no es ni puede ser un título ejecutivo.

Acota que el vicio ya no puede ser enmendado ni saneado, pues ha sido notificada la sentencia a las partes.

c) La excepción de prescripción de la acción ejecutiva.

Funda su excepción manifestando que la sentencia acompañada como título, fue dictada con fecha 6 de agosto de 2013 y notificada a su parte con fecha 20 de agosto de 2013.

Señala que la cláusula décimo segunda del contrato, expresa que el árbitro "conocerá en única instancia y sin forma de juicio, renunciando expresamente las partes a los recursos que puedan interponerse en contra de sus decisiones, incluso los que casación y queja".

Afirma que la sentencia quedó ejecutoriada desde su dictación, o al ser notificada el 20 de agosto de 2013, o aceptando que pudo haber habido queja, a pesar de la renuncia, dentro del plazo fatal de cinco días hábiles siguientes, por lo cual queda meridianamente en claro que la sentencia quedó a firme a fines de agosto de 2013, haciéndose la obligación exigible en esa misma fecha.

Continúa señalando que la presente demanda fue notificada su parte el 28 de octubre de 2016, vencidos los tres años de la prescripción de la acción ejecutiva.



Finaliza solicitando tener por opuestas las excepciones anteriores, por suficientemente fundadas, admitirlas a tramitación y, en definitiva, acogerlas, resolviendo que se niega lugar a la demanda ejecutiva de autos, con costas.

4° Que con fecha 18 de noviembre de 2016, la ejecutante evacua el traslado a las excepciones, solicitando en principio que se declaren inadmisibles las excepciones opuestas por la contraria, con costas, debido a que el requisito sobre admisibilidad de las excepciones a la ejecución, consistente en ofrecer medios de prueba, no ha sido satisfecho por la parte ejecutada.

En subsidio evacúa el traslado solicitando el pronto, inmediato y categórico rechazo de esas alegaciones, con costas, en base a los siguientes fundamentos:

a) En cuanto a la excepción de falta de capacidad o de personería o representación señala que, la ejecutada tiene la carga de probar la falta de personería, sin embargo, no acompañó ni ofreció ningún medio de prueba.

Continúa señalando que su parte tiene o posee personería suficiente para actuar en representación de Empresas Carozzi S.A., porque entiende que se ha dado estricto cumplimiento a lo normado en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil como lo ha estipulado por la Ley 18.120, siendo improcedente la presente excepción.

b) En lo que guarda relación con la excepción del N° 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, señala que carece de fundamento porque la ejecutada reconoció que fue notificada de la sentencia sin que se interpusiera recurso alguno.

Añade que en el comparendo de fijación de bases del procedimiento arbitral de fecha 30 de octubre de 2012, al que la parte ejecutada habría comparecido representada por doña Mónica Jottar Nasrallah, quien ninguna objeción planteó en ese momento ni tampoco durante la tramitación del arbitraje, en el que todas las resoluciones fueron autorizadas por el ministro de fe don Andrés del Valle Valenzuela.



Continúa señalando que siendo carga de la ejecutada probar la excepción alegada, no acompañó ni ofreció ningún medio de prueba para acreditar la supuesta falta de mérito ejecutivo del laudo arbitral.

c) En lo que dice relación con la excepción de prescripción. Luego de recodar lo señalado por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y destacar su parte final, concluye que se produce en la especie la última hipótesis de tal precepto normativo, ya que manifiesta que proceden los recursos de casación en la forma y queja, de conformidad al artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales.

Afirma que consta el fallo de autos quedó firme o ejecutoriado el 28 de octubre de 2013, y que la ejecutada fue notificada personalmente de esta demanda el 26 de octubre de 2016.

Finaliza solicitando, en subsidio, tener por evacuado el traslado conferido por resolución de 14 de noviembre de 2016, y rechazar las excepciones a la ejecución, con ejemplar condena en costas.

5° Que con fecha 22 de diciembre de 2016, se declararon admisibles las excepciones opuestas y se recibieron a prueba por todo el término legal fijándose los puntos que rolan en autos.

6° Que con fecha 28 de diciembre de 2017, se citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**I.- EN CUANTO A LAS OBJECIONES DOCUMENTALES:**

**PRIMERO:** Que con fecha 4 de noviembre de 2016, la parte ejecutada objeta los siguientes documentos: a) la sentencia arbitral. Fundado en que no es copia autorizada, en cuanto no está firmada o autorizada por ningún ministro de fe, no reúne los requisitos formales exigidos en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, por no estar autorizada por ningún ministro de fe, ni por dos testigos, en subsidio del anterior. Indica que dicha falencia le resta todo mérito probatorio y que le sería inoponible a su parte; y b) la



escritura pública de personería, señalando que carece de valor para acreditar la personería invocada.

Por su parte la ejecutante con fecha 25 de noviembre de 2016 evacúa el traslado señalando que, las objeciones planteadas no se fundan en causal legal alguna por lo que deben ser rechazadas, con costas.

**SEGUNDO:** Que, en cuanto a la sentencia arbitral, cabe tener presente que la autenticidad de los instrumentos públicos se asegura a través de tres factores: 1º) La oficialidad de la persona que lo autoriza; 2º) que el funcionario actué dentro de su competencia; y 3º) el respeto a la forma prevista por la ley. De ahí que de conformidad al artículo 1699 del Código Civil es público o auténtico, el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. En la especie la sentencia aparece autorizada por un abogado, quien no reúne las características de oficialidad y competencia legal, para considerar tal documento como público.

Por otra parte, de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, permite que la sentencia definitiva del arbitrador sea autorizada por dos testigos. De allí que se deja en evidencia que estamos frente a la de un documento diverso de las formalidades que se imponen para la producción de un documento público.

Entonces, si bien es cierto es posible compartir lo señalado por la parte ejecutada, en cuanto no estamos en presencia de un documento público, no es menos cierto que su objeción es posible subsumirla en la falta de autenticidad, y sabido que los instrumentos privados deben ser objetados por falsedad o falta de integridad, razón por la cual al no haberse fundado la objeción en una causal legal corresponde su rechazo.

Ahora bien, a las restantes alegaciones, es decir, lo relativo a la inoponibilidad y carencia de valor probatorio, aquello dice relación con el fondo lo que debe ser resuelto, en definitiva.



Asimismo, cabe rechazar la objeción planteada respecto de la escritura pública, pues, también no se funda en una causal legal de objeción, sino que más bien su alegación dice relación con el valor probatorio lo que debe ser resuelto, en definitiva.

**TERCERO:** Que con fecha 25 de noviembre de 2011 la parte ejecutante objeta y observa la carta de fecha martes 05 de noviembre del año 2013, enviada por Gustavo Hechem Jottar representante de Gustavo Hechem Jottar E.I.R.L.- Fundado en lo siguiente: que no procede el apercibimiento legal; que no es una carta certificada, y que no se ejecuta en autos el contrato.

Por su parte la ejecutada evacúa el traslado señalando que, atendida la falencia de argumentos procesales, se debe tener por no objetado en la forma legal.

**CUARTO:** Que en cuanto a la observación, si bien es cierto que los respectivos documentos fueron observados, lo cierto es que la respectiva observación fue tramitada como objeción, por lo que corresponde hacerse cargo de la misma en la sentencia definitiva, y considerando que se trata de documentos privados, y que éstos pueden ser objetados por falsedad o falta de integridad en conformidad a lo dispuesto en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, no habiéndose fundamentado claramente la causal legal de objeción que se habría configurado en este caso, ésta será rechazada. Asimismo, ocurre con la objeción, por lo que también cabe su rechazo sin mayores disquisiciones, por no haberse fundado claramente en alguna causal legal de objeción, cuestión que es independiente del valor probatorio que se les asigne en la sentencia.

**QUINTO:** Que con fecha 1 de diciembre de 2012 la parte ejecutante objeta por falta de integridad el documento acompañado, denominado copia de la notificación del fallo arbitral, fundado en que de conformidad al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, el documento es una simple certificación que no contiene la cédula que acredite la



notificación de la sentencia arbitral, y que no es íntegro pues no contiene los elementos exigidos por la ley.

Por su parte, la ejecutada evacua el traslado señalando que procesalmente, carece de consistencia, por lo cual procede negarle lugar, en todas sus partes, con costas.

**SEXTO:** Que la certificación de 20 de agosto de 2013 realizada por el receptor Jaime Acuña Herrera, da cuenta que se notificó la cédula a don Carlos Alberto Díaz Martínez, la sentencia de fojas 135 a fojas 143, cuyas copias integrales dejó fijadas en la puerta.

A su vez el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil señala que *"se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a virtud de orden de tribunal competente, salvo prueba en contrario"*.

Entonces, la certificación acompañada y realizada por el receptor judicial da cuenta de haberse realizado una actuación procesal, lo que constituye una presunción simplemente legal de que se realizó la notificación por cédula en forma establecida por la ley, es decir, fijando en la puerta las respectivas copia del proceso que da cuenta, razón por la cual correspondía a la contraria probar lo contrario, es decir, que lo que da cuenta tal certificación no corresponde al proceso arbitral sub lite y que dichas copias no fueron fijadas en la puerta, sin embargo, no acompañó prueba alguna al respecto. Además, no es requisito acompañar las copias de la sentencia para dar cuenta que se realizó dicha actuación procesal de notificación, toda vez que ello implicaría que el ejecutado recibió personalmente las copias, circunstancia que la ley no exige. En consecuencia, resulta forzoso el rechazo de la objeción planteada.

## **II.- EN CUANTO AL FONDO: \_**

**SÉPTIMO:** Que con fecha 11 de octubre de 2016 don Sergio Yávar Celedón abogado en representación de Empresas Carozzi S.A. interpone demanda ejecutiva en contra de Gustavo Hechem Jottar E.I.R.L., representada por don Gustavo Felipe Hechem





Jottar; atendida las razones que fueron reseñadas en lo expositivo de esta sentencia.

**OCTAVO:** Que con fecha 4 de noviembre de 2016, la parte ejecutada viene en oponer las siguientes excepciones a la ejecución: a) La excepción de falta de personería de quien comparece a nombre del ejecutante, de conformidad con el artículo 464 N° 2° del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 6° y 7° del mismo cuerpo legal; b) La excepción de faltarle al título los requisitos exigidos por las leyes para que tenga fuerza ejecutiva, conforme al artículo 464 N° 7° del Código de Procedimiento Civil; y c) La excepción de prescripción de la acción ejecutiva, conforme el N° 17° del citado artículo 464 del Código de Procedimiento Civil; atendidos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que fueron reseñados en la parte expositiva de este fallo.

**NOVENO:** Que con fecha 25 de noviembre de 2016 la ejecutante evacúa el traslado de las excepciones, solicitando en lo principal que se declare como inadmisibles las excepciones opuestas, con costas; y en subsidio solicitando el pronto, inmediato y categórico rechazo de esas alegaciones, con costas; atendidos los fundamentos referidos en lo expositivo.

**DÉCIMO:** Que la parte demandante y ejecutante para afianzar sus aseveraciones acompañó los siguientes documentos: 1) Copia autorizada de la sentencia definitiva de fecha 6 de agosto de 2013 junto a su certificado de ejecutoria; 2) certificado de valor del dólar de los Estados Unidos de América, emitido por el Banco Santander de fecha 7 de octubre de 2016; 3) copia autorizada de la escritura pública en que consta su personería para representar a Carozzi; 4) Copia del fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso N° 6223-2014, dictada con fecha 24 de octubre de 2014; 5) copia del fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol Ingreso N° 12889-2015, dictada con fecha de 29 de marzo de 2016; 6) copia del fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso N° 12.725-2017, dictada



con fecha de 8 de noviembre de 2017; 7) copia del fallo de la Excm. Corte Suprema, Rol Ingreso N°33.758- 2017, dictada con fecha de 2 de octubre de 2017; 8) copia del fallo de la Excm. Corte Suprema, Rol Ingreso N°36.794- 2017, dictada con fecha de 22 de noviembre de 2017; 9) copia de la resolución de 25 de septiembre del año 2012, del arbitraje "Empresas Carozzi S.A. con Gustavo Hechem Jottar E.I.R.L." 10) copia del Acta de fecha 30 de octubre del año 2012, que fija las bases del procedimiento arbitral caratulado "Empresas Carozzi S.A. con Gustavo Hechem Jottar E.I.R.L."; 11) copia del fallo de la Corte Suprema de fecha 12 de mayo de 1969, citado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXVI, número 3, Sección Primera, Corte Suprema, mayo de 1969, páginas 51-53; 12) copia del fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso N° 4364-2006, dictado con fecha 20 de abril de 2012; 13) copia del fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol Ingreso N° 9-2011, dictada con fecha de 21 de octubre de 2011.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que por su parte la demandada y ejecutada para apoyar sus asertos acompañó los siguientes documentos: 1) Carta de fecha martes 05 de noviembre del año 2013, enviada por Gustavo Hechem Jottar pp. Gustavo Hechem Jottar E.I.R.L.; 2) Copia autorizada y emitida con fecha 02 de noviembre del año 2016, de la inscripción de fojas 2050 N° 2305, en el Registro de Propiedad del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de Rengo; 3) Copia autorizada y emitida con fecha 02 de noviembre del año 2016, de la inscripción de fojas 1944 vta. N° 2173, en el Registro de Propiedad del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de Rengo; 4) Copia de la notificación del fallo arbitral de fecha 20 de agosto de 2013, del receptor judicial Jaime Acuña Herrera; 5) copia del contrato suscrito entre las partes, con fecha 26 de diciembre de 2007, N° Contrato: 000075; 6) expediente del arbitraje de Empresa Carozzi S.A. con Gustavo Hechem Jottar E.I.R.L.; 7) Copia autorizada de escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2013, otorgada por don Ernesto Montoya Peredo, Repertorio N° 11113-2013; 8) Copia



autorizada de inscripción de fojas 218 número 174 correspondiente al Registro de Hipotecas del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Rengo.

Con el mismo propósito rinde prueba testimonial compareciendo a declarar don Andrés Alfonso Poblete Rubio con fecha 18 de diciembre de 2017.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que en primer lugar, cabe tener presente que en cuanto a la inadmisibilidad de las excepciones, no corresponde emitir pronunciamiento al respecto en esta etapa del juicio puesto que aquello fue resuelto con fecha 22 de diciembre de 2016, resolución que tuvo por admisibles las excepciones opuestas y que fijó los hechos sobre los cuales debe recaer la prueba, resolución que no fue objeto de recurso respecto a la admisibilidad, pues únicamente se alegó que no correspondía recibir a prueba la excepción de prescripción.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, en cuanto a la excepción de falta de personería, que aquella se fundamenta en la falta de vigencia del mandato acompañado por el ejecutante, por haber transcurrido más de dos años de haber sido otorgado.

Por lo que resulta necesario tener presente que la representación en el mandato judicial, a diferencia del mandato civil, es un elemento de la esencia, y en autos no se ha cuestionado la existencia de dicho mandato sino que tan solo su vigencia, sin embargo, no existe norma legal alguna que obligue al demandante a probar que su mandato se encuentra vigente, pues para aquello habría que acreditar que dicho acto jurídico no se encuentra terminado, lo que constituiría un hecho negativo, y sabido es que respecto de los hechos negativos no se admite prueba, de ahí que correspondía a la demandada probar que el mandato se encuentra terminado, por alguna de las causales que señala expresamente señala el artículo 2163 del Código Civil -disposición que regula su forma de terminación-. En tales circunstancias, atendido lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, habiendo alegado la demandada que el mandato otorgado a los abogados de la ejecutante, no se encuentra



vigente, o bien se encuentra terminado, o que las obligaciones que emanan del mandato se encuentran extintas, como es la representación, correspondía a la demandada probar la concurrencia de algunas de la causales de terminación del mandato señaladas por la ley.

Sin embargo, la parte ejecutada no acompaña en autos prueba alguna en orden a acreditar que el mandato se haya terminado, ya sea por revocación sea expresa o tácitamente como lo alega, cuestión que, desde luego, pudo haber probado acompañando copia del mandato con la respectiva anotación marginal de revocación o bien copia escritura pública de revocación o nuevo mandato judicial, atendido el carácter público del documento acompañado sub lite.

De la misma forma, cabe tener presente, en cuanto al plazo de dos años que alega, aquello dice relación con el numeral 2° del artículo 2136, es decir, que el mandato termina por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato.

En este contexto, si bien es cierto el mandato puede sujetarse a un plazo extintivo o condición resolutoria que le ponga término (cuestiones o elementos accidentales del acto jurídico, por lo que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, pero pueden agregarse en virtud de cláusulas especiales). No obstante, del mandato no aparece en ninguna de sus estipulaciones que se haya sometido a un plazo para su vigencia. Además, se trata de un mandato general de representación, y no especial (cuyo objeto sea un negocio determinado). Por consiguiente, corresponde el rechazo de la excepción opuesta tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

**DÉCIMO CUARTO:** Que en lo que guarda relación con la excepción de faltarle al título los requisitos exigidos por las leyes para que tenga fuerza ejecutiva, conforme el artículo 464 N° 7° del Código de Procedimiento Civil, es menester recordar que, la sentencia para que tenga mérito ejecutivo es necesario la concurrencia de tres requisitos: a)



que sea firme; b) que se definitiva o interlocutoria; y c) que contenga una obligación de dar, hacer o no hacer.

En la especie la objeción se aboca únicamente a controvertir el segundo de los requisitos, apareciendo los restantes como cumplidos. En efecto, aquella se fundamenta en que la sentencia no aparece autorizada por un ministro de fe o por dos testigos como exige el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, sino que aparece actuando como actuario Andrés del Valle Valenzuela, un abogado que no es ministro de fe pública, razón por la que concluye que faltaría uno de los requisitos, a saber, que sea propiamente una sentencia definitiva.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en cuanto al contenido de la sentencia definitiva del arbitrador, aquello se encuentra expresamente regulado en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, señalando que:

*"La sentencia del arbitrador contendrá: 1° La designación de las partes litigantes; 2° La enunciación breve de las peticiones deducidas por el demandante; 3° La misma enunciación de la defensa alegada por el demandado; 4° Las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia, y, 5° La decisión del asunto controvertido. La sentencia expresará, además, la fecha y el lugar en que se expide; llevará al pie la firma del arbitrador, y será autorizada por un ministro de fe o por dos testigos en su defecto."*

**DÉCIMO SEXTO:** Que de la sentencia acompañada con fecha 11 de octubre de 2016, custodiada bajo el N° 1603-2016, se tiene de su foja 143, que aparece firmada por el árbitro arbitrador don Guillermo Weinstein Iglesias y el actuario don Andrés del Valle Valenzuela y que, desde luego, aparece que corresponde a la misma sentencia que ha sido acompañada por le ejecutada, y que forma parte del expediente o juicio arbitral custodiado bajo el N° 1955-2017. Asimismo, del expediente arbitral referido, en especial de fojas 10 se tiene que se designó como actuario a un "[a]bogado", a saber, a don Andrés del Valle Valenzuela. En consecuencia, dichos



documentos no objetados en forma y valorados legalmente permiten tener por acreditado que la sentencia cuya ejecución se tramita en autos, corresponde a don Guillermo Weinstein Iglesias y fue autorizada por el abogado don Andrés Valle Valenzuela.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que entonces, corresponde determinar si don Andrés del Valle Valenzuela tiene la calidad de ministro de fe, de esta forma cumplir con el requisito establecido en el artículo en comento.

Para lo cual cabe tener presente que el inciso primero del artículo 639 del Código de Procedimiento Civil señala que *"el árbitro practicará **solo o con asistencia de un ministro de fe**, según lo estime conveniente"*.

Por su parte, respecto de los árbitros de derecho el inciso primero del artículo 632 del Código de Procedimiento Civil indica que *"Toda la substanciación de un juicio arbitral **se hará ante un ministro de fe designado por el árbitro**, sin perjuicio de las implicancias o recusaciones que puedan las partes reclamar; y si está inhabilitado o no hay ministro de fe en el lugar del juicio, **ante una persona que, en calidad de actuario, designe el árbitro**"*.

Interpretando ésta última norma don Mario Casarino nos enseña que: *"Son ministro de fe y, por consiguiente, personas legalmente capacitadas para servir de actuarios a los jueces árbitros de derecho: los secretarios, los receptores y los notarios"*. Y agrega *"[e]xcepcionalmente puede ser actuario cualquier persona, siempre que en el lugar en que se siga el juicio no exista ministro de fe o, de existir, se encuentre inhabilitado"*.

En este orden de ideas, aparece que la presencia de un ministro de fe ante los árbitros de derecho es obligatoria, respecto a lo cual no ha cabido lugar a dudas de que se debe nombrar a un receptor, a un secretario judicial o a un notario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 632 inciso 1° Y 639 del Código de Procedimiento Civil, pero tratándose de los arbitradores es accidental, y debido a que es frecuente que en la tramitación seguida ante árbitros se



nombre a actuarios a personas que no detentan la calidad de notario, secretario de un tribunal o receptor judicial como ocurre en la especie, surge la duda si puede asumir cualquier persona esta calidad.

A modo de colorario, cabe señalar y/o hacer presente, que lo analizado, constituye una cláusula tipo en contratos de adhesión, en que por vía de protección a la libre competencia se ha dejado sin efecto cláusulas arbitrales en la que, con abuso de la posesión dominante, una parte impone a la parte más débil el árbitro para la solución de la controversia. Se ha fallado que los árbitros no deben ser designados por el exportador ni estipularse que no procede recurso alguno en contra de sus fallos (Comisión preventiva Central (fue reemplazada a partir de 2003, Tribunal de la Libre Competencia), 19 de julio de 1995, RDJ, t. XCII, secc. 6ª p. 181).

**DÉCIMO OCTAVO:** Que en este entendido, nuestra doctrina más autorizada ha estimado que si bien las sentencias arbitrales merecen ser calificadas como "instrumentos públicos", ya que son pronunciadas con las formalidades fijadas por la ley y autorizadas por un ministro de fe; lo que, sin embargo, no ocurre con los laudos de arbitradores cuando son dictados por árbitros arbitradores y autorizados por actuarios que no son fedatarios o por dos testigos, indicando "*[n]o nos atrevemos a decir lo mismo de las demás resoluciones arbitrales que, aunque pronunciadas en la forma prescritas por la ley, son autorizadas únicamente por un actuario o dos testigos, que son personas privadas incapaces de revestir de fe pública a los actos en que intervienen, o carecen de autorización por no serles necesarias. El tribunal arbitral, por sí solo, no tiene en nuestro concepto autoridad bastante para dar a sus actos de fe pública*" (Aylwin Azócar, Patricio, El Juicio Arbitral, Editorial Jurídica de Chile, p.491).

**DÉCIMO NOVENO:** Que así las cosas, si bien es cierto no es posible atribuir la calidad de ministro de fe que exige el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil a la actuación



realizada por el abogado don Andrés Valle Valenzuela -sobre todo si tomamos en consideración la distinción que realiza el artículo 632 del Código de Procedimiento Civil, respecto de los árbitros de derecho, entre ministro de fe y simple actuuario- no es menos cierto que nuestra jurisprudencia ha señalado que la falta de autorización por el actuuario del fallo arbitral no es siempre causal de nulidad, siempre que no haya duda que el escrito que lleva la firma de aquél, emana de él y constituye su fallo (C. Suprema, 12 de mayo 1969. R., t. 66, sec. 1ª, p. 51).

En la especie, si bien en principio el ejecutado puso en duda en su presentación que se tratara verdaderamente del texto de sentencia de don Guillermo Weinstein Iglesias, lo cierto es que el mismo acompañó el juicio arbitral, por lo que no cabe lugar dudas de que la sentencia lleva la firma de aquél, emana de él y constituye su fallo, por lo que malamente puede carecer de mérito ejecutivo. Por consiguiente, a pesar de no haberse cumplido en estricto sentido lo que reza el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, aquello no le resta mérito ejecutivo al documento acompañado pues no cabe duda de que se trata de una sentencia definitiva dictada por el árbitro arbitrador referido, razón por la cual corresponde el rechazo de la excepción alegada como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

**VIGÉSIMO:** Que en cuanto a la prescripción del mérito de los antecedentes que obran el expediente arbitral y de los documentos, lo que valorados en forma legal permiten tener por acreditado los siguientes hechos:

1.- Que con fecha 6 de agosto de 2013, se dictó una sentencia arbitral interna, cuyo cumplimiento compulsivo se persigue en autos.

2.- Que con fecha 20 de agosto de 2013, se notificó la sentencia a la parte demanda.

3.- Que con fecha 28 de octubre de 2013, se certifica la sentencia dictada por el árbitro don Guillermo Weinstein





Iglesias con fecha 6 de agosto de 2013 se encuentra firme y ejecutoriada.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil señala: *"Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites"*.

Una resolución se entiende firme o ejecutoriada dependiendo de los casos que pueden producirse: a) si no procede recurso alguno en su contra de ella, desde que se haya notificado a las partes; b) si proceden recursos en contra ella y ellos se han interpuesto, desde que se notifique el decreto que la mande a cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, y c) si proceden recursos en contra de ella y ellos no se han interpuesto, desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este caso, tratándose de sentencias definitivas, dice la ley *"debe el secretario certificar el hecho a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde ese momento, sin más trámite"* (esto último ha dado lugar a diversa interpretación que se trataran más adelante).

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, entonces, corresponde determinar si efectivamente nos encontramos en la situación primera, como alega la ejecutada, es decir, si contra la sentencia arbitral cuya ejecución se persigue en autos no procede algún recurso judicial, para lo cual cabe tener presente que del Contrato de Compraventa de Fruta de fojas 2 del Expediente Arbitral, en su cláusula décimo segunda que *"Cualquier dificultad que se produzca o promueva entre las partes acerca*



de la interpretación, aplicación, validez, cumplimiento, incumplimiento o resolución del presente contrato será resuelto por don Guillermo Weinstein Iglesias en calidad de árbitro arbitrador, renunciado expresamente las partes a los recursos que puedan interponerse en contra de sus decisiones,

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que entonces, si bien las partes renunciaron de forma expresa a todos los recursos judiciales, lo cierto es que nuestra doctrina y jurisprudencia ha sido clara que a pesar de existir dicha estipulación igualmente subsisten recursos pendientes.

En este orden de ideas se ha señalado: "(...) que la jurisprudencia y la doctrina son uniformes al señalar que la renuncia a los recursos legales es plenamente válida si es estipulada mediante cláusula expresa y por personas capaces. Sin embargo, también es uniforme la doctrina y jurisprudencia al señalar que el recurso de casación en la forma por incompetencia y ultra petita subsiste a pesar de cualquier renuncia, sea a todos, sea en especial el de casación (Patricio Alywin, *El Juicio Arbitral*, pág. 290)" (Corte de Apelación de Santiago, 10 de junio de 2002, RDJ, t. XCIX, sec. 2ª, pp. 64-66). En consecuencia, no es posible estimar que nos encontremos en la primera situación.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, así las cosas, establecido que en contra de la sentencia sub lite procedían recursos, queda por determinar que, si nos encontramos en la última situación planteada por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, como esboza la ejecutante, lo que ha dado lugar a dos puntos de vista diferentes, como se adelantó, es decir: a) Unos creen que la sentencia definitiva queda ejecutoriada desde que transcurren todos los plazos legales para interponer recursos en su contra, sin hacerlos valer. Señalando al respecto "[p]or lo demás, la circunstancia de omitirse el referido certificado no quitará a la sentencia su carácter de firme si en realidad lo estuviera por la expiración de los plazos que la ley concedía para la interposición de los recursos correspondientes, porque aquel trámite aparece impuesto únicamente por un propósito de



simplificación procesal, dándosele así el valor de una presunción legal que, como tal, admite prueba en contrario (43) (R. de D. tomo XXX, Marzo y Abril de 1933, Sex. 1ª, pág. 83). Tratado Práctico de Derecho Procesal, Carlos Anbalón Sanderson, p. 269, Volumen 1, 1965; La Cosa Juzgada en el Proceso Civil, p. 60); y b) otros en cambio, consideran que dicha sentencia solamente puede ser tenida por firme desde la referida certificación. "Se ajusta a la letra clara de ley, a contrario sensu, sin esa certificación no 'se considera firme'. Aun cuando esa certificación no es requisito 'ad solemnitatem', debemos entenderlo como una exigencia 'ad probatiem', destinada a garantizar procesalmente que se han producido las circunstancias que, en tal evento, se exigen para tener por acreditada la circunstancia de estar ejecutoriado el fallo. Sin su cumplimiento, como dice la ley, no "se considera firme" la sentencia y, por ende, no podrá servir de título para su ejecución, por faltarle un requisito que la ley exige para darle fuerza ejecutiva" (Guillermo Gruss Mayers, Tratado del Juicio Ejecutivo, En el Juicio Ejecutivo de la Obligaciones de Dar en Dinero, Tomo I, 2011, p.205).

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que la segunda de las posiciones doctrinales referidas a juicio de esta sentenciadora no resulta aplicable en la especie, toda vez que aquella se fundamenta en la interpretación literal, o gramatical del texto de la ley, y del texto literal del artículo se tiene que este señala expresamente: "**certificará el hecho el secretario del tribunal**", y el actuario, desde luego, en un sentido claro de la ley no es un secretario.

De la misma forma, la única forma de estimar que el actuario en los juicios ante arbitradores reúnen la calidad de secretario, es aplicando otras formas de interpretación, desde luego, desentendiendo el texto claro de ley y la forma de interpretación en que se basa aquella doctrina.

Incluso, aplicando otras formas de interpretación, por ejemplo, la sistemática, llegaríamos a la misma conclusión, pues como hemos señalado en los considerandos precedentes el actuario de marras no tiene la calidad de ministro de fe,



menos aún puede revestir la calidad de "secretario", toda vez que el artículo 379 del Código Orgánico de Tribunales reza que los secretarios son ministros de fe pública.

En consecuencia, no siendo aplicable la última parte del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil al fallo dictado por el árbitro arbitrador autorizado por un actuario, sólo cabe aplicar la regla general respecto de las resoluciones en que proceden recursos en su contra, es decir, que la sentencia se entenderá firme y ejecutoriada desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, además, la prescripción extintiva es una institución que produce sus efectos con absoluta independencia de la voluntad de las partes o de un tercero, con la sola salvedad de la necesidad de que sea invocada, y con concurriendo dicha alegación sólo requiere de cierto lapso de tiempo, así lo dice el artículo 2514 del Código Civil. En este contexto el transcurso del tiempo para que una acción prescriba no puede quedar sujeto a la mera voluntad o capricho de una persona, en este caso a la certificación de un actuario, toda vez que lo que importa es que se certifique hechos, en el caso de marras que respecto a la sentencia no se presentaron recursos en su contra en el plazo establecido por la ley, siendo irrelevante la certificación que realiza el actuario, si se dicta uno o dos meses después, como ocurre en la especie, pues la notificación se realizó con fecha 20 de agosto de 2013 y la certificación recién se realizó el 28 de octubre de 2013. En consecuencia, el plazo de prescripción debe computarse desde que la obligación se hizo exigible, lo que en la especie necesariamente coincide con la fecha en que venció el plazo para deducir el recurso extraordinario de casación en la forma, a saber, el día 31 de agosto de 2013, por lo que contado desde tal fecha, el plazo de prescripción para notificar la demanda ejecutiva venció el 1 de septiembre de 2014, sin embargo, la notificación de la presente acción se realizó con fecha 26 de



octubre de 2016, razón por la cual cabe acoger la excepción de prescripción opuesta por la parte ejecutada.

**VIGÉSIMO SEPTIMO:** Que a mayor abundamiento, se ha resuelto *"Para resolver aquello, no es menor determinar si el cómputo de los tres años se cuenta desde la fecha del certificado de ejecutoria -como lo resolvió la juez de primer grado- o desde una fecha anterior, que coincida con el último día para entablar los recursos legales. En esta línea argumentativa, útil es recordar que el Ministro de Fé llamado a certificar la ejecutoria solo puede constatar hechos, los que consisten -en la especie- en establecer si se dedujeron recursos contra la sentencia y, de no ser sí, cerciorarse si el plazo para hacerlo está o no vencido. En eso consiste, básicamente, el contenido fáctico que debería tener cualquier certificado de ejecutoria.*

*Como puede apreciarse, en este mismo orden de ideas, entonces, la fecha en que se emite el certificado de ejecutoria es del todo irrelevante, ya que si se dicta un mes, dos meses o un año después, lo que debe certificar el Ministro de Fé será siempre lo mismo: si hubo recursos y si los plazos están vencidos.*

*Ahora, distinto es, sin embargo, desde cuándo comienza a correr el plazo de la prescripción. Aquí, a diferencia de lo antes anotado, la fecha debe ser cierta e igual para todo prescribiente. Por eso, aquí sí importa el tiempo que demore el Secretario o Ministro de Fe en realizar su cometido de certificar la ejecutoria del fallo, pues mientras más tarde en hacerlo, mayor perjuicio se causará a quien pueda hacer valer la prescripción, aspecto de suyo curioso, porque eso significaría, entonces, que el transcurso del tiempo para que una acción prescriba queda sujeto a la mera voluntad o capricho de una persona. Sin duda, esa conclusión no puede ser aceptada, ya que conduce al absurdo. No obstante, afortunadamente en esta materia el legislador introduce como un parámetro objetivo (artículos 233 y 442) la noción de exigibilidad, lo que da nuevamente certeza al cómputo del inicio de la prescripción (Itma. Corte de Apelaciones de*



Santiago, Rol N° 537-2014, de fecha 7 de agosto de 2014, cons. 5° y 6°).

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil; 160, 170, 254, 434 y siguientes, 464 N° 7, 465 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 18.120, SE DECLARA:

**En cuanto a las objeciones documental:**

I.- Que SE RECHAZAN, las objeciones de fecha 4 de noviembre de 2016 de la parte ejecutada, sin costas.

II.- Que SE RECHAZAN, las objeciones y observaciones de fecha 25 de noviembre de 2011 de la parte ejecutante, sin costas.

III.- Que SE RECHAZA, la objeción de fecha 1 de diciembre de 2012 de la parte ejecutante, sin costas.

**En cuanto al fondo de la excepción deducida:**

IV.- Que SE RECHAZAN las excepciones opuestas con fecha 4 de noviembre de 2016 por la ejecutada, de falta de personería y de faltarle al título de faltarle al título los requisitos exigidos por las leyes para que tenga fuerza ejecutiva, sin costas, por estimarse que la ejecutada tuvo motivos plausibles para litigar.

V.- Que SE HACE LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado con fecha 4 de noviembre de 2016, en consecuencia, se niega lugar a la ejecución, sin costas por estimarse que la ejecutante que tuvo motivos plausibles para litigar.

Anótese y notifíquese.

**Rol N° C-1603-2016**

Dictada por doña **CAROLINA ALEJANDRA BRAVO YÁÑEZ**, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de Rengo. Autoriza doña Claudia Garrido Rosales, Secretaria Titular.

**Certifico:** que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento





Civil; En Rengo, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.

